

## **La judicialización de las acciones afirmativas: desafíos en el proceso electoral federal 2024 en Zacatecas y Michoacán.**

**Autora: Mayra Lucero Flores Borjas**

En México, las cortes desempeñan un papel crucial en la garantía y protección de los derechos políticos de la ciudadanía, especialmente a través de la implementación de acciones afirmativas durante los procesos electorales. Este concepto se refiere a medidas específicas diseñadas para promover la participación equitativa y justa de grupos históricamente marginados o discriminados en la vida política del país.

El proceso electoral de 2024 representó un momento decisivo para México, donde se enfrentan desafíos significativos en términos de inclusión y representación. Las cortes mexicanas, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes electorales de manera que no solo aseguren la igualdad formal, sino también la igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos políticos.

La acción afirmativa en este contexto puede incluir diversas medidas, como la asignación de cuotas de género en las listas de candidatos, la promoción de candidaturas indígenas, la garantía de accesibilidad para personas con discapacidades, entre otras. Estas medidas buscan corregir desigualdades estructurales y promover una representación más diversa y fiel a la composición demográfica de la sociedad mexicana.

La SCJN, a través de su capacidad interpretativa y resolutoria, juega un rol fundamental al definir los límites y alcances de estas medidas. Esto implica no solo asegurar que las acciones afirmativas sean efectivas y proporcionales, sino también protegerlas de posibles impugnaciones que pudieran surgir por parte de sectores que consideren que estas medidas vulneran otros principios constitucionales.

Además, las cortes deben estar atentas a asegurar que las acciones afirmativas no se conviertan en una herramienta de exclusión, sino que realmente cumplan con su objetivo de empoderar a los grupos históricamente discriminados y asegurar su participación plena en el proceso democrático. Ante esta situación, durante el proceso electoral 2024 se encontraron irregularidades en candidatas y candidatos que se presentaban por el principio de acción afirmativa para ocupar un cargo en el congreso, sin embargo, no

cumplían con las características culturales y físicas requeridas, ni contaban con el reconocimiento de las comunidades para ser representantes de las mismas.

Lo anterior, se ha convertido en un desafío importante para las políticas de acción afirmativa. Las acciones afirmativas, diseñadas para corregir desigualdades históricas y promover la inclusión, a veces pueden desviarse de su propósito original si no se implementan adecuadamente.

Es fundamental que las cortes y los organismos encargados de supervisar estas políticas sean vigilantes para asegurar que las acciones afirmativas no se conviertan en simples gestos simbólicos o en oportunidades para individuos que no representan realmente a las comunidades que buscan beneficiar.

En este contexto electoral, es preocupante que candidatos y candidatas estén utilizando la acción afirmativa sin tener las características culturales o el respaldo real de las comunidades que se supone deben representar. Esto no solo podría socavar el propósito de la acción afirmativa, sino también deslegitimar el proceso democrático al permitir la representación de personas que no cuentan con el apoyo genuino de sus comunidades.

Es esencial que las instancias responsables revisen cuidadosamente estos casos y tomen medidas correctivas si es necesario, asegurando que las políticas de acción afirmativa se implementen de manera efectiva y ética. Esto implica no solo cumplir con los requisitos formales de elegibilidad, sino también garantizar que los beneficiarios realmente representen y sean reconocidos por las comunidades que buscan empoderar.

Es por ello, que la presente investigación se basa en la siguiente pregunta: **¿Por qué las autoridades electorales mexicanas no cuentan con un mecanismo de evaluación sobre la efectividad en la aplicación de las acciones afirmativas para garantizar la correcta aplicabilidad de las candidaturas en comunidades afros y de la diversidad sexual?**

Es entonces que, la verdadera efectividad de las acciones afirmativas radica en su capacidad para promover la inclusión genuina y el empoderamiento de los grupos históricamente discriminados, lo cual requiere una vigilancia constante para evitar desviaciones y asegurar que realmente cumplan con su propósito social y democrático.